

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO



“Al servicio de la justicia y de la paz social”

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	EJECUTIVO
DEMANDANTE	MATERIALES EMO S.A.S.
DEMANDADA	PÓRTICOS INGENIEROS CIVILES S.A.S. EN REORGANIZACIÓN
INSTANCIA	SEGUNDA –APELACIÓN DE AUTO–
PROCEDENCIA	JUZGADO DIECIOCHO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
RADICADO	05001 31 03 018 2022 00386 01
PROVIDENCIA	INTERNO 2022-255
TEMAS	AUTO INTERLOCUTORIO N°044
DECISIÓN	PROCESO EJECUTIVO. ACREENCIAS POSTERIORES A INICIO DE PROCESO DE REORGANIZACIÓN
MAGISTRADA PONENTE	REVOCA MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

Medellín, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Procede el Tribunal a decidir el recurso de apelación interpuesto en el proceso de la referencia, por el apoderado de la parte demandante frente al auto de fecha 3 de noviembre de 2022¹, proferido por el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Medellín, mediante el cual se rechazó la presente demanda ejecutiva.

I. ANTECEDENTES

A través de apoderado judicial, la sociedad MATERIALES EMO S.A.S., promovió demanda ejecutiva pretendiendo se libre mandamiento de pago en su favor y en contra de la sociedad demandada PÓRTICOS INGENIEROS CIVILES S.A.S. EN REORGANIZACIÓN, por la suma de \$2.758.288.295 contenida en el pagaré base de recaudo de fecha 5 de mayo de 2021, más los intereses de plazo a la tasa del interés corriente bancario e intereses de mora a la tasa de 1.5 veces el interés corriente bancario.

¹ Aunque en el encabezado de la providencia recurrida se indica como fecha tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), evidente resulta que se trata de un error en el año, porque la firma electrónica evidencia que la fecha correcta es 3 de noviembre de 2022, máxime que se trata de una demanda presentada el 18 de octubre de 2022, siendo imposible entonces que se hubiese emitido el auto de rechazo antes de la presentación del libelo genitor.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Medellín, Despacho que mediante auto del 21 de octubre de 2022 la inadmitió requiriendo a la parte demandante para que acreditara el estado actual del proceso de reorganización de la ejecutada e informara los datos del promotor designado o arrimara el auto de apertura donde conste el nombramiento de éste.

Para cumplir las exigencias, el apoderado de la parte demandante aportó copia del auto de apertura del proceso de reorganización, donde consta la designación del promotor, e informó que la última actuación surtida en dicho trámite se efectuó el 25 de octubre de 2022, fecha en la que se celebró audiencia de solución de objeciones.

El 3 de noviembre de 2022, el juzgado de primer grado decidió rechazar la demanda exponiendo como sustento el mandato del artículo 20 de la Ley 1116 de 2006 relativo a la prohibición de iniciarse procesos ejecutivos frente a una empresa en reorganización.

II. LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con la decisión así proferida, el apoderado judicial de la parte demandante formuló recurso de apelación, exponiendo, en esencia, que las obligaciones reclamadas fueron contraídas con posterioridad al inicio del proceso de reorganización de la demandada, lo que aduce, conlleva a que no sea aplicable el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006; sino, el artículo 71 de la misma ley, que regula lo relativo a las obligaciones posteriores al inicio del proceso de insolvencia, norma que posibilita el cobro ejecutivo de dichas obligaciones y, para apoyar su argumentación, trajo a colación dos pronunciamientos sobre el tema, emitidos por la Superintendencia de Sociedades en los años 2013 y 2017.

En providencia del 15 de noviembre de 2022 el *a quo* concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo, disponiendo la remisión del expediente a este Tribunal, siendo repartido a este Despacho el 5 de diciembre de 2022, por

lo que procede resolver de plano conforme lo establece el artículo 326 del Código General del Proceso, previas las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

1. DEL PROCESO EJECUTIVO EN GENERAL.

Bien es sabido que el proceso ejecutivo parte del presupuesto insustituible de la existencia de un documento que de forma cierta consagra el derecho que se reclama, evidenciando la correlativa obligación del deudor y en cuya virtud, autorizado está el acreedor a reclamar del segundo la consabida obligación.

En consonancia con ello, establece el artículo 422 del Estatuto Adjetivo Civil, que podrán demandarse ejecutivamente las obligaciones claras, expresas y exigibles que consten en un documento proveniente del deudor o de su causante y que constituyan plena prueba contra él.

2. RÉGIMEN DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL Y TRÁMITE DE REORGANIZACIÓN.

El régimen judicial de insolvencia empresarial regulado por medio de la Ley 1116 de 2006, establece dos tipos de procesos; **el de reorganización** y el de liquidación judicial.

El proceso de reorganización empresarial, tal y como lo dispone el inciso 2° del artículo 1° de la Ley 1116 de 2006 pretende, a través de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos y está constituido por el conjunto de procedimientos que aúnan sus esfuerzos en otorgarle una alternativa a un deudor (empresa) que se encuentra en momento de inestabilidad financiera por la cual se afecta la continuidad de la empresa, pero les permite conservar la operación, así como la capacidad de empleo.

3. CASO CONCRETO.

Lo primero que se advierte es que de conformidad con el artículo 321 del Código General del Proceso, es susceptible de apelación, el auto *que rechace*

la demanda y el que niegue el mandamiento de pago razón por la que compete a este Tribunal resolver la alzada interpuesta contra el auto de fecha 3 de noviembre de 2022.

La discusión álgida en este asunto está dada por la situación de encontrarse la demandada en proceso de reorganización, debiendo analizar este Tribunal si le asistió razón al juez de primer grado en su determinación o, si es posible, como aduce la parte recurrente, que el crédito aquí cobrado sea ejecutado en proceso separado al trámite de reorganización.

Como se anteló en las consideraciones generales de esta providencia, la Ley 1116 de 2006 regula el régimen judicial de insolvencia empresarial, estableciendo como uno de los procedimientos de dicho régimen, el trámite de reorganización, en el que se propende por la preservación de una empresa viable, mediante un acuerdo encaminado a normalizar las relaciones comerciales y acreencias de ésta.

El artículo 17 de la mentada ley establece los efectos de la presentación y admisión de un deudor en proceso de reorganización y dispone, entre otros, que a partir de la fecha de presentación de la solicitud los administradores no pueden efectuar *“enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan al giro ordinario de los negocios del deudor...”*, que *“Desde la presentación de la solicitud de reorganización hasta la aceptación de la misma, el deudor únicamente podrá efectuar pagos de obligaciones propias del giro ordinario de sus negocios, tales como laborales, fiscales y proveedores”*; el artículo 18 establece que: *“El proceso de reorganización comienza el día de expedición del auto de iniciación del proceso por parte del juez del concurso”*; el artículo 19 refiere al inicio del proceso y dispone que la providencia que decreta el inicio del proceso debe contener, entre otros aspectos: *“Ordenar al promotor designado, que con base en la información aportada por el deudor y demás documentos y elementos de prueba que aporten los interesados, presente el proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, incluyendo aquellas acreencias causadas entre la fecha de corte presentada con la solicitud de admisión al proceso y la fecha de inicio del proceso, so pena de remoción, dentro del plazo asignado por el juez del concurso, el cual*

no podrá ser inferior a veinte (20) días ni superior a dos (2) meses.”, “Prevenir al deudor que, sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos o arreglos relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias tratándose de personas jurídicas.”; y en el artículo 19 se dispone que “A partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse ni continuarse demanda de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor. Así, los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado antes del inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse para ser incorporados al trámite...”.

Seguidamente, en el artículo 21 se regula lo atinente a la continuidad de contratos, así:

“Por el hecho del inicio del proceso de reorganización no podrá decretarse al deudor la terminación unilateral de ningún contrato, incluidos los contratos de fiducia mercantil y encargos fiduciarios con fines diferentes a los de garantía.

Tampoco podrá decretarse la caducidad administrativa, a no ser que el proceso de declaratoria de dicha caducidad haya sido iniciado con anterioridad a esa fecha. Los incumplimientos de obligaciones contractuales causadas con posterioridad al inicio del proceso de reorganización, o las distintas al incumplimiento de obligaciones objeto de dicho trámite, podrán alegarse para exigir su terminación, independientemente de cuando hayan ocurrido dichas causales.

El deudor admitido a un trámite de reorganización podrá buscar la renegociación, de mutuo acuerdo, de los contratos de tracto sucesivo de que fuera parte.

Cuando no sea posible la renegociación de mutuo acuerdo, el deudor podrá solicitar al juez del concurso, autorización para la terminación del contrato respectivo (...).”

Y, por otra parte, el artículo 71 establece que “*Las obligaciones causadas con posterioridad a la fecha de inicio del proceso de insolvencia son gastos de administración y tendrán preferencia en su pago sobre aquellas objeto del acuerdo de reorganización o del proceso de liquidación judicial, según sea el caso, y **podrá exigirse coactivamente su cobro**, sin perjuicio de la prioridad que corresponde a mesadas pensionales y contribuciones parafiscales de origen laboral, causadas antes y después del inicio del proceso de liquidación judicial. Igualmente tendrán preferencia en su pago, inclusive sobre los gastos de administración, los créditos por concepto de facilidades de pago a que hace*

referencia el párrafo del artículo 10 y el párrafo 2o del artículo 34 de esta ley” (Resaltado intencional).

De las normas reseñadas en precedencia se puede concluir que: (i) el proceso de reorganización promueve la continuidad del giro ordinario de los negocios del deudor; (ii) también propende por la continuidad de los contratos, para cuya terminación debe mediar autorización del juez de la reorganización; (iii) las acreencias que se incluyen en dicho proceso son las causadas antes del mismo y entre la fecha de corte presentada con la solicitud de admisión al proceso y la fecha de inicio del proceso y, (iv) a partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización no puede admitirse ni continuarse demanda de ejecución contra el deudor, pero existen obligaciones posteriores al inicio del proceso que sí pueden cobrarse coactivamente.

El juzgado de primera instancia adujo como sustento para rechazar la demanda que, el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006 dispone que a partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse ni continuarse demanda de ejecución en contra del deudor, sin parar mientes, que el pagaré base de recaudo tiene fecha posterior al inicio del proceso de reorganización, tópico que era indispensable que abordara el *a quo*, porque como se viene diciendo en esta providencia, el proceso de reorganización no suspende los contratos en curso, ni el giro normal de los negocios de la sociedad inmersa en dicho trámite y, las acreencias que en la reorganización se incluyen, son las causadas **hasta la admisión de la reorganización**, siendo posible cobrar ejecutivamente acreencias posteriores a dicha admisión.

En este caso, los anexos de la demanda, dan cuenta que el auto de apertura del trámite de reorganización data del 29 de mayo de 2019 y el pagaré y la carta de instrucciones arrimados tienen fecha del 5 de mayo de 2021, lo que implicaba la necesidad de que el *a quo* indagara, al inadmitir la demanda, no sólo por la fecha de admisión del proceso de organización, como lo hizo; sino también, por el contrato o negocio causal, para determinar si se trata de aquellos que, por mandato del artículo 21 de la Ley 1116 de 2006 pueden continuar luego del inicio del trámite de reorganización o aquellos que pueden

celebrarse en el transcurso del proceso de reorganización y cobrarse ejecutivamente.

Sobre este tema pertinente resulta traer a colación lo expuesto por la Superintendencia de Sociedades en OFICIO 220-153026 del 06 de agosto de 2020, al resolver una consulta, así:

De conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 1116 de 2006, “Las obligaciones causadas con posterioridad a la fecha de inicio del proceso de insolvencia son gastos de administración y tendrán preferencia en su pago sobre aquel objeto del acuerdo de reorganización o del proceso de liquidación judicial, según el caso, y podrá exigirse coactivamente su cobro, (...)”. (Subraya y negrilla fuera de texto).

Del estudio de la norma antes transcrita, se desprende que los gastos de administración surgidos u originados durante el trámite de un proceso de un proceso de insolvencia se deben pagar preferentemente a medida que se vayan causando, es decir, deberán atenderse de preferencia en los términos y condiciones inicialmente estipulados, **conservando los acreedores el derecho de ejecución individual por su no satisfacción.**

Luego, los gastos de administración a que alude el artículo 71 ibídem, hacen referencia a todas aquellas obligaciones que se causen a partir de la apertura de un proceso de insolvencia, llámese acuerdo de reorganización, liquidación por adjudicación o liquidación judicial. Ejemplos de los señalados gastos pueden ser los honorarios del promotor o del liquidador, los gastos necesarios para el mantenimiento de la empresa en funcionamiento o la conservación de activos que conforman el patrimonio del deudor, las obligaciones por servicios públicos o **derivadas de contratos de tracto sucesivo, causados a partir del inicio del proceso concursal.**

De lo anterior, podemos concluir que uno de los efectos de los procesos concursales es la división de las obligaciones a cargo del deudor en dos categorías: i) las causadas antes de la fecha de inicio del proceso de insolvencia respectivo, las cuales quedarán sujetas a las resultas de éste, esto es, que solamente se pueden hacer valer dentro del proceso concursal y sus titulares pierden el derecho de ejecución individual o separada y, ii) **las originadas con posterioridad a la fecha de apertura del proceso concursal, las cuales tienen el carácter de gastos de administración y, por ende, deben pagarse en la forma prevista en el artículo 71 ya citado.** (Resaltado intencional).

En similar sentido la Superintendencia de Sociedades se manifestó en oficio 220- 082755 de 2019 en los siguientes términos:

“De estas disposiciones se infiere que la fecha de admisión del deudor al proceso de insolvencia determina el tratamiento diferenciado de sus obligaciones, pues aquellas causadas con anterioridad al auto de apertura quedan sujetas a las resultas del proceso concursal y su pago se hace en los términos del acuerdo respectivo, en consideración a que el

proceso de insolvencia es el único escenario en que los acreedores pueden hacer valer sus créditos ya que pierden el derecho de ejecución individual o separada de los mismos. **A su vez, las obligaciones derivadas del desarrollo de los negocios del deudor admitido al proceso de insolvencia y hasta la terminación del acuerdo, se consideran gastos de administración**, los cuales no hacen parte del trámite, se pagan con preferencia respecto de las obligaciones que sí son objeto del mismo y a medida que se vayan causando, y adicionalmente pueden ser cobrados dentro de un proceso ejecutivo ante la justicia ordinaria.

El Juez concursal, lo ha interpretado en la misma dirección como se aprecia en el aparte que a continuación se transcribe: “De conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 1116 de 2006 “Las obligaciones causadas con posterioridad a la fecha de inicio del proceso de insolvencia son gastos de administración y tendrán preferencia en su pago sobre aquel objeto del acuerdo de reorganización (...)”. Así las cosas, la obligación se causa o nace desde el momento en que la deudora tiene la obligación de pagarla, pero puede que su pago o exigibilidad se postergue en el tiempo, y ello no cambia la fecha de su causación.” (Resaltado fuera del texto).

También resulta oportuno citar lo indicado por la Superintendencia de Sociedades en oficio 220-112800, que aunque alude al concordato de la anterior Ley 222 de 1995, es muy ilustrativo en cuanto a los principios de las normas de reorganización y su finalidad, allí expuso la Superintendencia:

De otra parte, el artículo atrás transcrito se ubica en la sección tercera del capítulo segundo del título segundo de la Ley 222, que se ocupa de regular los efectos de la apertura del concordato, a continuación de la referente a la prelación del concordato, las obligaciones diferentes al pago de suma de dinero, la interrupción del término de prescripción e inoperancia de la caducidad, la continuidad de los contratos de tracto sucesivo y la cancelación y el restablecimiento de gravámenes. La preceptiva referida a los contratos de tracto sucesivo, y principalmente al celebrado con usted por la concursada, considera esta Superintendencia que si bien puede llegar hasta su terminación, todo conforme a los términos de redacción, habrá necesidad de medirlo en relación directa con el objetivo del concordato y la importancia que el mismo reviste para aquella. Así, se debe en primera instancia determinar que el contrato es necesario para la sociedad y no afecte la masa de bienes, que en últimas son la garantía de los acreedores. Con todo, y si bien es cierto que la iniciación del proceso concursal no puede ser considerado como causal de terminación del contrato, habrá de tenerse en cuenta que si la terminación se produce con posterioridad a la apertura, las sumas a pagar por tal concepto, corresponderá a gastos de administración y como tal deben pagarse de preferencia. Igualmente se hace necesario observar, en sentido práctico y lógico, la existencia de abismal diferencia con aquellos contratos de tracto sucesivo de prestación de servicios públicos o el suministro por los proveedores de las materias primas, dado que su conveniencia no se traduce en el simple hecho de la reducción de los pasivos del deudor, sino en la medida que ello contribuye al mejoramiento de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo. La base de este señalamiento se

encuentra en la regla constitucional según la cual el interés particular debe ceder al interés general o lo que lo mismo, se deben remover todos aquellos obstáculos que vayan en detrimento de unos y beneficio de otros. Es decir, se debe buscar no sólo la eficacia de los derechos de todos los que intervienen en una situación como la planteada, sino igualmente la equidad, procurando la protección del interés público comprometido, en guarda de su prevalencia sobre los intereses particulares que pueden encontrar satisfacción, pero dentro del marco de las responsabilidades y obligaciones sociales a que alude la Constitución

De la lectura de los anteriores conceptos, que aunque no resultan vinculantes para este Despacho, si son ilustrativos en este tema que esencialmente es de conocimiento de la Superintendencia de Sociedades, se concluye entonces que algunos contratos, pueden generar obligaciones posteriores al inicio del proceso de reorganización, las cuales pueden cobrarse en proceso ejecutivo separado y que la finalidad de dicho trámite, antes que liquidar y finiquitar la sociedad, es lograr la recuperación de los negocios del deudor.

Puestas así las cosas, se evidencia que la decisión generalizada, sin estudio detallado del caso concreto, adoptada por el juez de primer grado y que conllevó al rechazo de la demanda con sustento en estar la ejecutada inmersa en proceso de reorganización, resulta precipitada, siendo necesario revocar dicho rechazo y ordenar al *a quo* que, antes de decidir sobre el rechazo de la demanda o negativa del mandamiento de pago, inadmita la demanda nuevamente e indague por el contrato o negocio causal y estudie de forma juiciosa si se trata de aquellos negocios y acreencias que pueden continuar y cobrarse ejecutivamente luego del inicio del trámite de reorganización.

Resulta pertinente indicar que lo anterior no implica que se deba, obligadamente, librar mandamiento de pago, pues ello depende del cumplimiento de las exigencias mencionadas en el párrafo precedente y de los requisitos del título base de recaudo, los que aún no han sido analizados por el juez de primera instancia, exigencias que, considera este Despacho, no deben estudiarse en este momento y en esta sede, pues el eventual cumplimiento o no de las mismas puede dar lugar a discusiones y recursos, que en caso de decidirse en este momento y en esta instancia se estarían limitando.

CONCLUSIÓN.

Habrá de **REVOCARSE** la decisión objeto de alzada, en consecuencia de lo cual el *a quo* deberá inadmitir de nuevo el libelo genitor, para indagar por el contrato o negocio causal y, luego, deberá estudiar de forma juiciosa si la acreencia aquí cobrada refiere a aquellos negocios y obligaciones que pueden continuar y cobrarse ejecutivamente luego del inicio del trámite de reorganización.

COSTAS

Por ser la decisión del recurso de apelación favorable a la parte recurrente, además de no estar integrada la litis, no hay lugar a imponer condena en costa de esta instancia.

Por lo expuesto, **la suscrita Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín,**

IV. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la decisión objeto de alzada de fecha 3 de noviembre de 2022, en consecuencia de lo cual el *a quo* deberá inadmitir de nuevo el libelo genitor, para indagar detenidamente por el contrato o negocio causal, atendiendo a lo explicado en esta providencia, luego de lo cual, deberá estudiar de forma juiciosa si la acreencia aquí cobrada refiere a aquellos negocios y obligaciones que pueden continuar y cobrarse ejecutivamente después del inicio del trámite de reorganización.

SEGUNDO. Sin lugar a condena en costas.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE


MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO
Magistrada

(Firma escaneada de conformidad el artículo 105 del Código General del Proceso en concordancia con la Ley 2213 de 2022)